Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro.

**VISTAS** las constancias para resolver el Recurso de Revisión **03243/INFOEM/IP/RR/2023** presentado por **XXX XXX,** en lo sucesivo el Recurrente, en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información **00503/FGJ/IP/2023**, por parte de la **Fiscalía General de Justicia del Estado de México** en adelante el Sujeto Obligado; Se emite la presente resolución con base en los siguientes:

# **ANTECEDENTES**

* **Solicitud de acceso a la información pública.**
1. El día **nueve de mayo de dos mil veintitrés**,se presentó ante el Sujeto Obligado vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en adelante SAIMEX, la siguiente solicitud de información pública:

*“Ya el INFOEM declaró que el caso del feminicida de Atizapan es de interés público, en el Recurso de Revisión 1026/INFOEM/IP/RR/2022, por eso pido: 1. Me indiquen cuantas carpetas de investigación tienen abiertas en contra de ese feminicida, no solo la informada en ese recurso de revisión, así como detallen todas y cada una de las diligencias efectuadas en cada una, con sus fojas totales por diligencia y por cada carpeta, en caso de que eso obre en medios electrónicos, se señale cuales diligencias estan así. También requiero que me la entreguen en medios electrónicos y solo con el testado necesario, por el tema de interés público. 2. Señale cuantas carpetas judiciales se han abierto, así como las audiencias celebradas y las sentencias dictadas, las requiero en medios electrónicos y solo con el testado necesario, por el tema de interés público. 3. Requiero copia de la carpeta de ejecución de cada sentencia y solo con el testado necesario, por el tema de interés público. En caso de no entregármelo, pediré al INFOEM que me lo entreguen, incluso que lo publiquen como obligación de transparencia.”*

* Se eligió como modalidad de entrega de la información: A través del **SAIMEX.**
* **Declinación de incompetencia, prórroga y respuesta del Sujeto Obligado.**
1. El **once de mayo de dos mil veintitrés** el Sujeto Obligado declinó su incompetencia de manera parcial ante el Sujeto Obligado Poder Judicial por ser el competente respecto de las carpetas judiciales y sentencias en los expedientes judiciales.
2. Posteriormente en fecha **treinta de mayo de dos mil veintitrés** el Sujeto Obligado, solicitó una ampliación del plazo ordinario para dar contestación a la solicitud de información a efecto de poder realizar una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas que pudieran poseer o generar la información que dé respuesta a lo requerido, hasta por siete días hábiles adicionales.
3. El **ocho de junio dos mil veintitrés**, el Sujeto Obligado, dio respuesta a través de dos archivos electrónicos ***ACUERDO 503.pdf*** y ***OFICIO NÚMERO 2211-MAIP-FGJ-2023.pdf****,* que contienen lo siguiente:
* Acuerdo de clasificación de información SE/13/2023/02, a través del cual el Comité de Transparencia aprueba por unanimidad la clasificación de la carpeta de investigación integrada en contra de la persona referida en la solicitud de información.
* Que contiene el oficio número 02211/MAIP/FGJ/2023, mediante el cual, la Titular de la Unidad de Transparencia, informa de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado al solicitante.
* **Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad)**
1. El **nueve de junio de dos mil veintitrés**, el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta, realizando las siguientes manifestaciones:
* **Acto impugnado:** *“La clasificación como reservada”*

* **Razones o Motivos de inconformidad:** *“Me quejo de la clasificación como reservada de lo que pedí, porque es de interés publico y ya el INFOEM ya ha dicho que debe ser publico, por eso pido además de que se abra la investigación que la publiquen en el SIPOT, todos debemos saber los avances de esa investigación y con ello mandar un mensaje de que se esta investigando y que nunca mas existirá un feminicida serial en el país. Ojalá reiteren lo del 1026, porque debemos saber que pasó y por eso la reserva no es procedente.”*
* **Manifestaciones, alegatos y respuesta complementaría.**
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, se acordó a las partes a efecto de que en un plazo máximo de siete días, el Recurrente manifestara lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos, y el Sujeto Obligado presentará el Informe Justificado.
2. El Recurrentedejó de realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera. Por su parte, el Sujeto Obligado, rindió su informe justificadoa través de un acuerdo de clasificación, confirma su respuesta inicial, insistiendo a través de la prueba de daño, la procedencia de la clasificación de la información solicitada.
3. En fecha catorce de julio de dos mil veintitrés se convocó al Sujeto Obligado a una audiencia para mejor proveer, al que recayó un acuerdo en el que se asentaron los argumentos de los servidores públicos asistentes por parte de la Fiscalía, que versaron en la confirmación de la reserva de la información.
* **Ampliación para resolver y cierre de instrucción.**
1. Este Órgano Garante no pasa por alto justificar, que la dilación en la resolución del presente asunto, encuentra justificación en el incremento de recursos de revisión a resolverse por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas para la emisión de las resoluciones a dichos medios de impugnación, motivo por el que se acordó ampliar el término para resolver el presente asunto.
2. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
3. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
4. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
5. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
6. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
7. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
8. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o *cuasi jurisdiccional* respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Seguidamente, en fecha **trece de agosto de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y, ordenó la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

## **PRIMERA. Competencia**

1. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDA. Procedencia.**

1. Este Órgano Garante considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; asimismo no se tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia.
2. Asimismo, es de suma importancia señalar que la parte recurrente no proporciona un nombre o datos de identificación como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante lo anterior, no proporcionar el nombre completo no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo* ***serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

1. Por otro lado, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la citada Ley de la materia, por lo que es procedente que este Instituto conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.**

1. Se solicitó tener acceso, a la información que a continuación se simplifica:
* **Número de carpetas de investigación iniciadas en contra del feminicida señalado;**
* **Diligencias efectuadas en cada una, con sus fojas totales por diligencia y por cada carpeta, en caso de no obrar en medios electrónicos, se señale cuales diligencias se encuentran así;**
* **Número de carpetas judiciales iniciadas, así como las audiencias celebradas y las sentencias dictadas; y**
* **Carpeta de ejecución de cada sentencia.**
1. En respuesta, el Sujeto Obligadoremitió el archivo ya descrito en el anterior Párrafo 2. Inconforme con la respuesta, se interpuso recurso de revisión argumentando sustancialmente en contra de la clasificación de la información.
2. En dichas condiciones, la controversia a resolver en el presente proveído, corresponde a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracción IIde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado deMéxicoyMunicipios; fracción que determina la hipótesis relativa a la clasificación de la información; contexto del cual se dolió el Recurrente al momento de interponer su inconformidad. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocara en determinar si el Sujeto Obligado con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaseñalada.

## **CUARTA. Estudio de la controversia.**

1. Determinado lo anterior; revisaremos la atención otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud que dio origen a este recurso, considerando imprescindible establecer lo que la regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de Transparencia local, en su artículo 12, el cual establece que quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma, del mismo modo, el artículo 18 establece que los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.
2. Asimismo, es relevante mencionar que el artículo 19 del ordenamiento local de la materia señala que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.
3. Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley.
* **De los actos consentidos**
1. Acotado lo anterior, primeramente referir que el particular se inconforma puntualmente de la clasificación que fue objeto de clasificación la carpeta de investigación integrada en contra del feminicida de referencia, dejando de impugnar lo relativo al resto de rubros que integraron la solicitud de información, así como la respuesta relativa a la declinación de incompetencia, por tanto dichos rubros no serán objeto de análisis, toda vez que se concluye que se actualiza la figura de actos consentidos.
2. De tal forma que, la parte de la solicitud que no fue impugnada debe declararse consentida, toda vez que al no realizar manifestaciones de inconformidad; no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que no realizó manifestación alguna al respecto.
3. Sirve de sustento, la siguiente tesis jurisprudencial con número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

1. Del Criterio antes citado, se advierte que cuando el particular impugnó la respuesta del Sujeto Obligado, no expresó razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, por tanto estos deben declararse atendidos, pues se entiende que el Recurrente está conforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, al no contravenir la misma. Por tanto, se consideran un acto consentido y, en consecuencia, este Órgano Resolutor no entrará al estudio del resto del soporte documental que avala las licencias no impugnadas por las razones ya expuestas.
* **De la carpeta de investigación**
1. Ahora bien, relativo a la solicitud de información impugnada a saber la carpeta de investigación, primeramente destacar que como el propio particular aduce, está relacionada a un asunto de interés público y de trascendencia nacional, razón la cual fue mediatizado y sujeto al escrutinio público a través de múltiples reportajes y notas periodísticas por parte de todos los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales.
2. En ese contexto, sobre el valor probatorio de las notas periodísticas, cabe traer a colación la tesis aislada número I.4o.T.4 K, emitida por el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II, página 541, en Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época, titulada ***“NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE ‘UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO’”*** en la que se señala que el hecho de que el público lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no implica por esa sola circunstancia que la noticia se convierta en un hecho “público y notorio”, toda vez que se entiende por “notorio” lo que es público y sabido de todos, o un hecho cuyo conocimiento forme parte de la cultura propia de un círculo social determinado, en el tiempo de su realización.
3. De tal situación, es de mencionar que lo consignado en las notas periodísticas no constituye un hecho público o notorio, sino que es una opinión de su autor, por lo que sólo se pueden tomar como **indicios.** No obstante por otro lado, la propia Fiscalía, han revelado diversa información, a través de su cuenta institucional de X, como la que se observa:





1. Dicho documento contempla la necesidad de la difusión de la información, para que, en su caso, otras posibles víctimas puedan identificarlo y en su caso, denunciarlo, aun en caso de otros delitos. Por lo que los datos que fueron hechos de la opinión pública, fueron aportados por los ofendidos, medios de comunicación y autoridades, derivado de la necesidad de encontrar a personas desaparecidas; *máxime* que se tratándose de mujeres y de un feminicida serial.
2. En esa tesitura, el feminicidio es considerado como un delito grave de conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Código Penal del Estado de México, que no otorga beneficios sustitutivos ni suspensión de la pena de prisión en términos del artículo 69, fracción X, del referido Código y es tipificado por el artículo 281 del Código Penal vigente en la Entidad, que se comete **cuando una persona priva de la vida a una mujer por razones de género**, el mismo artículo enlista las circunstancias que pueden considerarse como constitutivas de esta violencia.
3. Luego entonces, es que la información que se solicita respecto de las personas que han llevado a cabo ese tipo de delitos, cobra especial relevancia de interés público, ya que se conjugan varios factores como la participación de las familias por encontrar a mujeres desaparecidas, se trató de feminicidios, el número de casos convirtió en feminicida serial, se dio una amplia difusión de todos los detalles de la investigación y del proceso penal.
4. Con las anteriores acotaciones, se concluye que el presente asunto cuenta con un interés especial de la sociedad, por los siguientes elementos que se enuncian:
* Los medios de comunicación han documentado el presente caso, e hicieron públicos todos los detalles de la investigación, incluidos datos personales de víctimas y ofendidos.
* Los delitos investigados son privación de la vida tipificado como feminicidio, en contra de mujeres.
* El autor de los delitos fue detenido el 18 de mayo del 2021, por la Fiscalía del Estado de México, en su domicilio, información que se encuentra publicada en diversos medios de comunicación, pues es el mismo lugar del hallazgo de cuerpos y restos óseos.
* Cuenta con diversas sentencias, siendo la primera en el mes de marzo de 2022.
* La solicitud de información fue interpuesta el 9 de mayo de 2023, fecha en que ya existe una sentencia condenatoria. Dato que fue informado a la opinión pública por el propio Sujeto Obligado.
* La imagen del sentenciado fue dada a conocer, por medios de comunicación y del Sujeto Obligado, en virtud de ya estar sentenciado, asimismo por el alto número de posibles víctimas, por lo que la difusión de su imagen tuvo un propósito legítimo.
* Durante el proceso, fueron revelados datos, incluso previo a la judicialización del caso.
1. Ahora bien el Recurrente solicitó la carpeta de investigación que fue objeto de clasificación, de la que vale destacar, el Ministerio Público presentó al juez, para poner a disposición al imputado, de tal suerte que la solicitud consistente en las actuaciones realizadas por el o los agentes del Ministerio Público obran en dicha carpeta que, evidentemente forma ya parte del expediente judicial. Lo anterior, cobra relevancia porque, la secrecía de la investigación cobra otras dimensiones pues si bien, una vez judicializada la carpeta, puede el Ministerio Público contar con más tiempo para ampliar la investigación, plazo que puede ser autorizado por el Juez de Control, en las audiencias públicas, muchos de los datos que en su momento debieron ser protegidos como secretos por el Ministerio Público se revelan con el objetivo de que el juez determine, primero la existencia de elementos para dictar orden de aprehensión y finalmente para resolver con una sentencia el asunto, como ya resulta del caso concreto.
2. En respuesta e informe justificado, el Sujeto Obligado, como fue desarrollado en antecedentes, reservó la información mediante Acuerdo de Comité de Transparencia por un periodo de 5 años, con fundamento en el artículos 140, fracciones VI, IX y XI de la Ley de Transparencia de la entidady,señalando que la clasificación es el proceso mediante el cual los sujetos obligados determinan que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, debiendo aplicar de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información, dichos ordenamientos señalan lo siguiente:

**Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.**

*“Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; …*

*IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señala como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; …*

*XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

1. Lo anterior, se adujo en correlacionó la información a los numerales Vigésimo Sexto, Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que disponen que podrá considerarse como información reservada, en términos de lo previsto en el artículo 113 fracciones VII, XII y XIII de la Ley General de Transparencia antes invocada cuando: exista un proceso penal o una carpeta de investigación en trámite, se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal, así como aquella reservada por disposición de Ley.

**Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.**

***Vigésimo sexto.****De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.*

*Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:*

*I.        La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;*

*II.       Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y*

*III.      Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.*

*Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.*

*Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General.*

*Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.*

1. En esa tesitura se desarrolló la prueba de daño por parte del Sujeto Obligado, identificando la improcedencia de las fracciones, a saber:
* Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos. Al respecto, so se identifica que en el caso que nos ocupa, pueda afectar a la persecución de delitos, pues la persona fue detenida y llevó el proceso en prisión preventiva; a la fecha actual se encuentra sentenciado por prisión vitalicia, por lo que no se presume que pueda generar afectación en este aspecto.
* Altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación. Para la alteración de investigación, se debería encontrar en este periodo, sin embargo, a partir de las documentales, se presume que la información ya fue incluso judicializada al punto tal, que el indiciado ya fue sentenciado, por lo que no se logra advertir que la publicidad de la información genere una afectación a la investigación ni al proceso de investigación. Es más, la propia Fiscalía reveló datos previos de la obtención de una sentencia condenatoria.
* Afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes. Sobre este punto, se identifican derechos del debido proceso como lo es la presunción de inocencia, sin embargo, este principio ya no tiene vigencia, desde el momento en el cual fue sentenciado.
* Afecte la administración de justicia. La carpeta de investigación que en su caso sería objeto de ser entregada, ya fue incorporada como medios de prueba al juicio sobre el cual, ya se emitió sentencia condenatoria, por lo que, no se identifica afectación alguna a la administración de justicia.
* Afecte la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Esto no faculta en su caso a la reserva total de la carpeta sino exclusivamente a aquellos datos que puedan generar afectación a la seguridad de un denunciante querellante, testigo o sus familias, por lo que no se logra identificar la existencia del riesgo real, demostrable e identificable, pues el Sujeto Obligado, no la desarrolló.
1. Luego entonces se identifica que no se actualizan las causales de procedencia para la clasificación de la carpeta de investigación en el caso concreto. Ahora bien, los elementos de la investigación como son las pruebas, al momento de incorporarse a las audiencias judiciales, comparten la naturaleza de públicas de las audiencias, contempladas así por el artículo 5° del Código Nacional de Procedimientos Penales:

*Artículo 5o. Principio de publicidad*

***Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código.***

*Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo.*

1. Es entonces que las pruebas aportadas, al haber sido desahogadas, ya no se considera que generen afectación al proceso, sin embargo, existen supuestos especiales, como son aquellas pruebas o partes de la carpeta de investigación, que el juez considera necesario restringir al conocimiento público, presupuestos contemplados en el artículo 64, que en cuyo caso únicamente serán partes de las audiencias y no así la totalidad de la información.

*Artículo 64. Excepciones al principio de publicidad El debate será público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada, cuando:*

***I. Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él;***

*II. La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas;*

*III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible;* ***IV. El Órgano jurisdiccional estime conveniente;***

*V. Se afecte el Interés Superior del Niño y de la Niña en términos de lo establecido por los Tratados y las leyes en la materia, o VI. Esté previsto en este Código o en otra ley. La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y motivada constando en el registro de la audiencia.*

1. Ahora bien, no se omite señalar que del análisis sistemático de los artículos 467 al 487, la sentencia, no queda firme en tanto a que no exista una sentencia definitiva, para lo que el Imputado, cuenta con la Apelación y posterior a ello, el Juicio de Amparo Directo; sin embargo, suponiendo sin conceder se actualizara el hecho, esto ya no es para efectos de la carpeta de investigación, sino exclusivamente con los elementos aportados en juicio, por ello, la publicidad de la Carpeta de Investigación, a la fecha y con los elementos aportados, como lo es la sentencia de primera instancia, se identifica que no genera afectación, siempre y cuando, se salvaguarden las partes que contengan datos sensibles, puedan afectar la integridad de las personas o bien, puedan revictimizar a los familiares, por lo que se deberá hacer un ejercicio para clasificar las partes de las carpeta y expedientes en poder del Sujeto Obligado y serán clasificables únicamente las partes que actualicen estos supuesto.
2. Es entonces que esta fracción, no puede ser invocada para reservar la información de la carpeta de investigación en su totalidad, pues en este momento procesal no se actualizan los elementos contemplados en el Lineamiento en análisis. Por otro lado relativo a la *Fracción IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público*; fue sentenciado desde el año 2022, por lo que, a la fecha de la solicitud, esta fracción ya no era invocable, pues esta investigación ya se incorporó al expediente judicial.
3. Respecto de la *Fracción XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan*; al respecto es necesario traer a contexto el Código Nacional de Procedimientos Penales:

*“SEGUNDO. - Ahora bien, el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que, en todo procedimiento penal, se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo, se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijen la Constitución y la legislación aplicable.*

*El citado Código Nacional, señala en su artículo 127 que es competencia del Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.*

*En ese sentido, el artículo 212 del Código de referencia, establece que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito; así como, la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.*

*Aunado a lo anterior, los artículos 15 y 106 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra señalan lo siguiente:*

*"Artículo 15. Derecho a la intimidad y/o la privacidad*

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo* ***se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales,*** *en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

*Artículo 106. Reserva sobre la identidad*

***En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste.***

***Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos será sancionada por la legislación aplicable.***

***En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia.”***

*“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en las competencias respectivas en términos de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.*

*“Artículo 81.- Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada en los casos siguientes:*

*…*

*V. La contenida en averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes y demás archivos relativos a la investigación para la prevención y la investigación de los delitos y faltas administrativas, en términos de las disposiciones aplicables.”*

*Conforme a los artículos citados, se desprende que es reservada toda aquella información contenida en averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes y demás archivos relativos a la investigación, sin omitir señalar, que este órgano autónomo forma parte de las autoridades estatales en materia de seguridad pública, de conformidad con el artículo 14, fracción IV de la Ley de Seguridad del Estado de México, mismo que establece lo siguiente:*

*“Artículo 14.-Son autoridades estatales en materia de seguridad pública: …*

*IV. El Fiscal; y.*

*…”*

1. Como se aprecia el Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente contempla la clasificación de datos personales y no así de la carpeta, resultando inaplicable al únicamente limitar al conocimiento de terceros no autorizados información relativa a datos personales, lo que ya fue difundido incluso por la propia Fiscalía General de Justicia, como lo es el nombre, la dirección y demás datos personales del imputado y de las víctimas.
2. Luego entonces se colige que la información si puede ser entregada en versión publica, identificando cualquier dato personal sensible, salvaguardando en todo momento la media afiliación de las víctimas así como la integridad, dignidad y sobre todo la búsqueda de la no revictimización de los ofendidos y familiares en términos del artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también considerando información reservada, como aquella que fue determinada por el Juez, en términos del artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que es información que el propio juzgados, considero que afecta a los intereses de terceros, identificando que la publicidad continua en términos del artículo 65 del mismo Código Nacional.
3. Por otro lado, derivado de la propia y especial naturaleza de lo solicitado no pasa desapercibido lo siguiente. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 142, fracción II, abre la posibilidad a este Organismo Garante a determinar violaciones graves a derechos humanos en los siguientes términos:

***“Artículo 142.*** *Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:*

*…*

*II. Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente, cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

*…”*

1. Luego entonces, al tratarse de feminicidio se considera como la máxima expresión de la violencia de género; al respecto se identifica que, para ser considerada por las autoridades con este carácter, debe estar involucrado por acción o por omisión el Estado. Como sustento a lo anterior se trae a colación la Tesis Aislada de la Novena Época, con registro digital 200110, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 459, que lleva por rubro y texto:

***GARANTIAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACION GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO******97 CONSTITUCIONAL******.***

*Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos.* ***Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.***

1. En esa tesitura, al tratarse de una persona que como ya es del dominio público, privó de la vida a varias mujeres, no existe oscilación que se trata de una vulneración a los derechos humanos.
2. Toda vez que el feminicidio, debe ser considerado como una violación grave a los derechos humanos, pues si bien no existe participación directa del Estado, se puede afirmar la de que la autoridad es impotente para abordar la problemática, pues la seguridad pública, es una obligación exclusiva del Estado y por ello, de manera indirecta, el incremento del delito de feminicidio se relaciona al actuar del Estado.
3. En este contexto, la tesis previamente citada, permite circunscribir al delito de feminicidio en el supuesto b), al identificarse la existencia de un desorden generalizado en donde la autoridad, se encuentra impotente para encausar el respeto a las garantías individuales, pues si bien, la autoridad realiza las funciones y por ello no se puede considerar como omisa o negligente, lo cierto es que los esfuerzos no están siendo suficientes para mitigar la violencia contra las mujeres.
4. En este orden de ideas, el feminicidio, debe ser considerado como una violación grave a los derechos humanos, pues si bien no existe participación directa del Estado, se puede afirmar la de que la autoridad es impotente para abordar la problemática, pues la seguridad pública, es una obligación exclusiva del Estado y por ello, de manera indirecta, el incremento del delito de feminicidio se relaciona al actuar del Estado.
5. En este orden de ideas, entonces es dable a este punto afirmar la naturaleza de la información, en su calidad de pública, pues se actualiza un supuesto de excepción, al encontrarnos ante violaciones graves de derechos humanos, para lo que, sirve como refuerzo de argumentos las tesis jurisprudenciales que se citan a continuación:

***“VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS NO PUEDEN CLASIFICARSE COMO CONFIDENCIALES CONFORME A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, VIGENTE HASTA EL 9 DE MAYO DE 2016.***

*Conforme al artículo 14, párrafo último, del ordenamiento citado, no puede invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos contra la humanidad. En ese sentido, si bien las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la información que contienen podría afectar gravemente la persecución de delitos y la privacidad de las víctimas, y con ello, al sistema de impartición de justicia, lo cierto es que la ley mencionada previó como excepción los casos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad de conocer las diligencias llevadas a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Máxime que estos supuestos no sólo afectan a las víctimas u ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican; de ahí que la publicidad de esa información se presenta como una parte integrante del derecho a la verdad, el cual no sólo se vincula con los familiares de las víctimas, sino con toda persona, ya que aquéllos y la sociedad deben ser informados de lo sucedido.”*

***“VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS FUNDAMENTALES. POR REGLA GENERAL EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD DE LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON AQUÉLLAS, ABARCA EL NOMBRE DE LAS VÍCTIMAS.***

*Del artículo 14, párrafo último, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente hasta el 9 de mayo de 2016, se advierte que, por regla general, no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos contra la humanidad, sin hacer distinciones o excepciones respecto al nombre de las víctimas, sino que presenta una directriz clara e indubitable del acceso a la publicidad de esa información, ante la entidad de las violaciones o delitos implicados que generan un interés de la sociedad para conocer la conducta estatal respecto a la debida investigación de tales actos, protegiendo en cualquier caso el honor de las víctimas. En ese sentido, la función social derivada de la publicidad de los nombres de las víctimas en esos casos radica en despertar la conciencia, tanto de la autoridad como de las personas en general, sobre la necesidad de evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en esos casos y conservar viva la memoria de la víctima; así, trasladar una mera cifra estadística o número de expediente por un "nombre o rostro" implica adquirir verdadera conciencia del problema en cuestión y dignifica al ser humano, dando un lugar decoroso a la memoria de quienes fueron lesionados por conductas especialmente gravosas y permite que la sociedad interpele ante el Estado para conocer la verdad de los hechos acontecidos, y vigile que las autoridades cumplan su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las violaciones graves de derechos fundamentales.”*

1. Es por esta razones que considera necesario que toda la información respecto a este asunto, sea considerado como una exclusión a la reserva en términos del artículo 142 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, desestimándose la pretendida clasificación de la información propuesta por el Sujeto Obligado, conforme a las siguientes conclusiones:

**RIESGO DEMOSTRABLE.**

* **Fracción VI de la Ley Local de Transparencia**. Al no identificarse un riesgo real, no se puede demostrar el mismo.
* **Fracción IX de la Ley Local de Transparencia**. Al no identificarse un riesgo real, tampoco es demostrable esta fracción.
* **Fracción XI de la Ley Local de Transparencia**. Como ya se desarrolló, si bien si se acreditó el riesgo real, también se logró determinar por este Organismo Garante, que nos encontramos ante un supuesto de excepción, por lo que no existe un riesgo demostrable.

**RIESGO IDENTIFICABLE.**

* **Fracción VI de la Ley Local de Transparencia**. No hay riesgo identificable en el caso que nos ocupa.
* **Fracción IX de la Ley Local de Transparencia**. No hay riesgo identificable en el caso que nos ocupa.
* **Fracción XI de la Ley Local de Transparencia**. Como ya se desarrolló, si bien si se acreditó el riesgo real, también se logró determinar por este Organismo Garante, que nos encontramos ante un supuesto de excepción, por lo que no existe un riesgo identificable.
1. Es entonces que por lo que respecta a la carpeta de investigación que fue objeto de reserva y que fue la única impugnada por la parte **Recurrente**, se concluye categóricamente, que no se actualizaron los supuestos de reserva de la información. Sumado a que, se trata de una inequívoca una **violación grave de derechos humanos**, toda vez que a la fecha han existido omisiones gubernamentales de dar solución a un problema que afecta a toda nuestra población, de manera especialmente focalizada a las mujeres.
2. No pasa desapercibido señalar al respecto, que dicha problemática escaló al punto tal, que no bastó con la creación del tipo penal, sino que el 31 de julio de 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres acordó la procedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de México en once municipios; en octubre de 2019, la CONAVIM declaró una segunda Alerta, esta vez enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la Entidad, en siete de los municipios que ya estaban considerados en la primera alerta, esta declaratoria, tiene como finalidad, el focalizar los esfuerzos gubernamentales para la disminución de la violencia, de manera coordinada en los tres niveles de gobierno.
3. El aumento de cifras ha generado la necesidad por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a publicar las estadísticas de los feminicidios y homicidios dolosos a través de la página electrónica institucional, con liga de acceso directo https://fgjem.edomex.gob.mx/estadisticas-feminicidio-homicidio, lo que nos permite identificar la urgencia que tenemos de solucionar esta problemática.
4. Finalmente, respecto de la solicitud de información relativa a: *“…pido además de que se abra la investigación que la publiquen en el SIPOT…”,* es de señalarse que el recurso de revisión no es la vía para realizar solicitudes o sugerencias; sino que corresponde a un mecanismo que permite a los ciudadanos impugnar las respuestas o la falta de respuesta de un sujeto obligado a una solicitud de acceso a la información o de acceso a datos personales, a efecto de para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de los mexiquenses, así como exigir el cumplimiento de sus derechos en estas materias. Por lo que en relatadas circunstancias resulta improcedente realizar un análisis al respecto.
5. Así, conforme a lo analizado a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 186, fracciones III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, a la solicitud de acceso a la información objeto del presente análisis.

**QUINTO. De la versión pública.**

1. Como ya se hizo la referencia, entre los documentos solicitados por el Particular se advierte la existencia de datos personales susceptibles de clasificación como confidencial, por lo que, el Sujeto Obligado deberá elaborar las versiones públicas respectivas, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Al respecto de la versión pública, se precisa que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
3. De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.
4. Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.
5. En concordancia con lo previó, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.
6. Asimismo, en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.
7. En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:
8. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que ésta sea identificada o identificable.
9. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.
10. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad.
11. Además, en el artículo 5° de dicho ordenamiento jurídico, establece que es la Ley aplicable para todo tratamiento de datos personales.
12. En ese orden de ideas, los artículos 6°, 7°, 8° y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, disponen que los responsables del tratamiento de datos personales, deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; además, que dicho tratamiento deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales y con el consentimiento de su titular, además de que debe estar justificado en ley (principio de finalidad).
13. Por tales situaciones, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a una persona física identificada e identificable, como su nombre o imagen. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen datos personales. En este sentido, cualquier información que por sí sola o relacionada con otra permita hacer identificable a una persona, es un dato personal, susceptible de ser clasificado.
14. En este contexto, la confidencialidad de los datos personales tiene por objetivo establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre el particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales versus el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.
15. De tal suerte, las instituciones públicas tienen la doble responsabilidad, por un lado, de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de esos datos sea de interés público. En este orden de ideas, toda la información que transparente la gestión pública, favorezca la rendición de cuentas y contribuya a la democratización del Estado Mexicano es, sin excepción, de naturaleza pública; tal es el caso de los salarios de todos los servidores públicos, la entrega de recursos públicos bajo cualquier esquema, el cumplimiento de requisitos legales, entre otros; información que necesariamente está vinculada con datos personales, que pierden la protección en beneficio del interés público (no por eso dejan de ser datos personales, sólo que no están protegidos en la confidencialidad).
16. Dada la complejidad de la información cuando involucra datos personales, pudiera pensarse que se trata de dos derechos en colisión; por un lado, la garantía individual de conocer sobre el ejercicio de atribuciones de servidores públicos así como de recursos públicos y, por el otro, el derecho de las personas a la autodeterminación informativa y el derecho a la vida privada; tratándose de los datos personales que obran en los archivos de las instituciones públicas, la regla es clara, ya que los datos personales que permiten verificar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de obligaciones legales, transparentan la gestión pública y favorecen la rendición de cuentas, constituyen información de naturaleza pública, en razón de que el beneficio de su publicidad es mayor que el beneficio de su clasificación, aun tratándose de información personal.
17. Ahora bien, cuando las personas tienen una relación comercial, laboral, de servicios, trámites o del tipo que sea, necesariamente por un tema de interés público, debe cederse un poco de privacidad, de tal forma que la gente en general pueda verificar el debido desempeño de los servidores públicos, la aplicación de la ley y el ejercicio de recursos públicos; sin embargo, esto obliga a un ejercicio de ponderación en donde únicamente se privilegie la publicidad de los datos esenciales para la transparencia y rendición de cuentas, sin afectar la vida privada de las personas.
18. Bajo este esquema, se aprecia que la información ordenada, puede contener información susceptible de clasificar como confidencial; de forma enunciativa más no limitativa; se analiza lo siguiente:
* **Media filiación de las víctimas y ofendidos.**
1. Este concepto, puede ser considerado también como descripción física, lo que en términos de la Tesis aislada con registro digital 228757, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 513, se considera como información únicamente de naturaleza administrativa pero no indispensable en la entonces Averiguación Previa:

*ORDEN DE APREHENSION. PARA SU LEGALIDAD NO ES REQUISITO LA MEDIA FILIACION DEL AGRAVIADO.*

*La media filiación o descripción física de los agraviados no es un requisito indispensable para la legalidad de la orden de aprehensión, sino que constituye una medida administrativa, auxiliar para los elementos policiacos que realizan la captura y sirve, además, de referencia estadística, por lo que, su omisión en los autos que integran la averiguación previa en modo alguno constituye violación a las normas procedimentales.*

1. Es entonces, que buscando proteger la dignidad y la memoria de las víctimas, así como de los ofendidos por lo que cualquier dato que se relacione a esto, **deberá ser considerado como información de naturaleza confidencial**. **No así sus nombres** ya que como se menciona en el estudio del presente proveído, los medios de comunicación han documentado el presente caso, e hicieron públicos todos los detalles de la investigación, incluidos datos personales de víctimas y ofendidos.
2. **Respecto del hoy sentenciado su imagen fue dada a conocer, por medios de comunicación y del Sujeto Obligado, en virtud de ya estar sentenciado, por lo que la información de mérito respecto del sentenciado será pública.**
* **Información aportada durante la determinación a la excepción al principio de publicidad, contemplado en el artículo 64, del Código Nacional de Procedimientos Penales.**
1. Los jueces tienen la facultad de determinar cuándo se restrinja el principio de publicidad, sin embargo, esta restricción no es indeterminada, sino debe adecuarse a lo contemplado en los artículos 64 y 65 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el desarrollo de esas etapas únicamente será objeto de publicidad los resultados esenciales de lo que fue practicado a puerta cerrada, para lo que se reproducen:

*Artículo 64. Excepciones al principio de publicidad*

*El debate será público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada, cuando:*

*I. Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él;*

*II. La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas;*

*III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible;*

*IV. El Órgano jurisdiccional estime conveniente;*

*V. Se afecte el Interés Superior del Niño y de la Niña en términos de lo establecido por los Tratados y las leyes en la materia, o*

*VI. Esté previsto en este Código o en otra ley.*

*La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y motivada constando en el registro de la audiencia.*

*Artículo 65. Continuación de audiencia pública*

*Una vez desaparecida la causa de excepción prevista en el artículo anterior, se permitirá ingresar nuevamente al público* ***y, el juzgador que presida la audiencia de juicio, informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos desarrollados a puerta cerrada.***

1. **Esta información tendrá el carácter de confidencial en atención a que únicamente ser revelarán los resultados esenciales, pues la secrecía se hace para proteger derechos de terceros.**
2. Estos datos se señalan de manera enunciativa, sin contravención de que el Sujeto Obligado, contemple otros datos que sean objeto de clasificación.

**• Datos personales de las víctimas.**

1. Se precisa que la información desarrollada y revelada por diversos medios de comunicación, se conceptualiza en la presente resolución de conformidad con la Tesis aislada 2a. LIII/2017 (10a.) de la décima época, con registro digital 2014070, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 1070, que contempla la publicidad de los nombres de las víctimas en violaciones graves a los derechos humanos, que lleva por rubro y texto lo siguiente:

***“VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS FUNDAMENTALES. POR REGLA GENERAL EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD DE LAS*** *“INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON AQUÉLLAS, ABARCA EL NOMBRE DE LAS VÍCTIMAS.*

*Del artículo 14, párrafo último, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente hasta el 9 de mayo de 2016, se advierte que, por regla general, no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos contra la humanidad, sin hacer distinciones o excepciones respecto al nombre de las víctimas, sino que presenta una directriz clara e indubitable del acceso a la publicidad de esa información, ante la entidad de las violaciones o delitos implicados que generan un interés de la sociedad para conocer la conducta estatal respecto a la debida investigación de tales actos, protegiendo en cualquier caso el honor de las víctimas. En ese sentido, la función social derivada de la publicidad de los nombres de las víctimas en esos casos radica en despertar la conciencia, tanto de la autoridad como de las personas en general, sobre la necesidad de evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en esos casos y conservar viva la memoria de la víctima; así, trasladar una mera cifra estadística o número de expediente por un "nombre o rostro" implica adquirir verdadera conciencia del problema en cuestión y dignifica al ser humano, dando un lugar decoroso a la memoria de quienes fueron lesionados por conductas especialmente gravosas y permite que la sociedad interpele ante el Estado para conocer la verdad de los hechos acontecidos, y vigile que las autoridades cumplan su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las violaciones graves de derechos fundamentales.”*

1. En este contexto, se revelaron datos los nombres de al menos cuatro de sus víctimas mortales a través de notas periodísticas, que son los siguientes:
* Norma Jiménez Carreón
* Berenice Sánchez Olvera
* Alyn N
* Gardenia N
* Flor Nínive Vizcaino Mejía
* Rubicela Gallegos Castillo
* Reyna González Amador
1. Estos datos fueron publicados como lo fue Excelsior (a través de un artículo publicado en la liga de acceso directo https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ellas-son-las-victimas-del-feminicida-serial-de-atizapan/1450127) por diarios como los son Proceso (a través de la liga electrónica https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/5/19/el-presunto-feminicida-serial-andres-n-confiesa-haber-matado-30-mujeres-en-20-anos-264219.html), infobae (a través de la liga https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/19/identifican-a-rubicela-gallegos-como-otra-posible-victima-de-andres-n-el-feminicida-serial-de-atizapan/, así como la liga https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/19/cuidense-las-extrano-el-ultimo-mensaje-a-sus-hijas-de-flor-ninive-victima-de-andres-el-feminicida-serial-de-atizapan/), esta información fue citada a partir de las credenciales de elector, halladas al interior del inmueble, por lo que, resulta necesario concluir, que fue información aportada por las autoridades a los medios de comunicación. De igual manera, se expresó a los medios de comunicación la confirmación de la identidad de los restos óseos, **siendo del dominio público.**

**• Datos personales de los familiares.**

1. A través de diversos medios, algunos de los familiares, dieron entrevista o realizaron pronunciamiento sobre los hechos, como se puede observar en el medio de comunicación “Milenio Digital”, información consultable en la liga de acceso directo https://www.youtube.com/watch?v=gckUOnErTaM, en donde el padre de una de las víctimas, otorgó una entrevista, o como la tía de otra de sus víctimas, expresó lo que vivieron a partir de la desaparición de su sobrina, tanto ella, como las hijas de la víctima, información consultable en la liga de acceso directo https://www.rockandpop.com.ar/las-hijas-de-flor-presunta-victima-de-andres-n-feminicida-de-atizapan-dejaron-la-escuela-por-terror-a-ser-secuestradas/, así como la información del esposo de la última de las víctimas del imputado, información consultable en la liga de acceso directo https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/20/fue-el-esposo-de-la-ultima-victima-y-no-la-policia-quien-descubrio-la-casa-del-horror-de-andres-n-el-feminicida-serial-de-atizapan/.
2. Es entonces que nos encontramos ante un caso de relevancia nacional, por la cantidad de víctimas mortales, toda vez que se reveló que al menos fueron 19 víctimas, de las cuales, 6 ya fueron identificadas a través de pruebas genéticas, lo cual, requirió de la difusión de la información para localizar a los familiares de las posibles víctimas, a través de la difusión realizada por los medios y porque la persona que se encuentra sentenciado por estos delitos, era un participante de la vida social y política de su municipio, por señalar algunos de los elementos.
3. La apertura de la información por parte de la Fiscalía permitió a la autoridad, vincular a las víctimas con sus familiares, quienes, a la postre, revelaron *motu proprio*, hechos ulteriores a la desaparición de sus familiares. **La divulgación de la información y la identificación las víctimas en el caso en estudio, se identifica que genera un beneficio social, pues permite transparentar que a diferencia de otros casos de desaparición y posible feminicidio, en este se hizo justicia y la Fiscalía hizo su trabajo para lograr una sentencia condenatoria.**
* **Nombre de las partes del juicio de extinción de dominio.**
1. Como ya se desarrolló previamente, el juicio de extinción de dominio se lleva por la vía civil y no por la vía penal, por lo que, si bien ya fue revelado de manera pública el nombre de quien expresó ser propietario, esto no constituye un pronunciamiento especializado por una autoridad que determine la propiedad de un inmueble, por ello, **el nombre de los propietarios legales de los inmuebles que sean interesados de conservar la propiedad del referido juicio, en calidad de propietarios, deberán ser clasificados.**
* **Datos sensibles.**
1. Durante el desarrollo de las audiencias o bien, a través de la tramitación de amparos, se pudo revelar estado de salud, así como datos específicos que puedan ser considerados como sensibles en términos del artículo 4°, fracción XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, diversas a la ya difundida.

*XII. Datos personales sensibles: a las referentes de la esfera de su titular cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud física o mental, presente o futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.*

* **Media afiliación de las víctimas y ofendidos.**
1. Este concepto, puede ser considerado también como descripción física, lo que en términos de la Tesis aislada con registro digital 228757, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 513, se considera como información únicamente de naturaleza administrativa pero no indispensable en la entonces Averiguación Previa:

*ORDEN DE APREHENSION. PARA SU LEGALIDAD NO ES REQUISITO LA MEDIA FILIACION DEL AGRAVIADO.*

*La media filiación o descripción física de los agraviados no es un requisito indispensable para la legalidad de la orden de aprehensión, sino que constituye una medida administrativa, auxiliar para los elementos policiacos que realizan la captura y sirve, además, de referencia estadística, por lo que, su omisión en los autos que integran la averiguación previa en modo alguno constituye violación a las normas procedimentales.*

1. Es entonces, que buscando proteger la dignidad y la memoria de las víctimas, así como de los ofendidos por lo que cualquier dato que se relacione a esto, deberá ser considerado como **información de naturaleza confidencial.**
2. **Nociones generales.**
3. Es preciso señalar que para el caso de que la información que se ordena cuente con datos personales confidenciales, deberá entregarse en su versión pública acompañada del acuerdo que para tales efectos emita su Comité de Transparencia de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Al respecto de la versión pública, se precisa que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
4. De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.
5. Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. En concordancia con lo previo, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.
6. Asimismo, en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.
7. Atento a lo anterior es que no pasa desapercibido para este Órgano Garante que los sujetos obligadosserán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia. Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto. Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación.  | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación. De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial.  | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular. En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección. Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas; asimismo que si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.
2. Por anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO**. Resultan parcialmente fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **03243/INFOEM/IP/RR/2023,** en términos de los **Considerandos** **Cuarto** y **Quinto** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **REVOCA** la respuesta emitida por el Fiscalía General de Justicia del Estado de Méxicoy se **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en versión pública, la siguiente información:

1. **Carpeta de Investigación señalada en la respuesta de la solicitud de información 00503/FGJ/IP/2023, al 9 de mayo de 2023.**

Para efectos de lo anterior, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre la eliminación de los datos y documentos confidenciales del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del **RECURRENTE.**

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente Resolución.

**QUINTO.** Notifíquese al **Recurrente** la presente Resolución, vía **SAIMEX**.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **Recurrente** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnar vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR MAYORÍA DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ EMITIENDO VOTO DISIDENTE; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EN LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.